

Protocolo de atención a víctimas del delito de trata de personas en los Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos de las Corporaciones de Asistencia Judicial de Chile

Colección **Documentos de Política nº 19**
Área Justicia

Protocolo de atención a víctimas del delito de trata de personas en los Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos de las Corporaciones de Asistencia Judicial de Chile

Documento de Política nº 19

Área: Justicia



Edita

Programa EUROsociAL
C/ Beatriz de Bobadilla, 18
28040 Madrid (España)
Tel.: +34 91 591 46 00
www.eurosocias-ii.eu
info@eurosocias-ii.eu

Con la colaboración de:

Expertise France



Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo
International Development Law Organization



Ministerio de Justicia



La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de los autores y en ningún caso se debe considerar que refleja la opinión de la Unión Europea.

Edición no venal.

Realización gráfica:

Marta Rojas

Chile, 2013



No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Autores

Equipo técnico

Juan Andrés Bermejo Romero de Terreros

Andrés Vazquez

Olga Lucía Pérez (Coordinadora)

Con la participación de:

Departamento de Asistencia Jurídica

División Judicial del Ministerio de la Justicia de Chile

Agradecimientos

Elena Incisa di Camerana, cordinadora regional para América Latina y el Caribe, IDLO, socio operativo EUROsociAL

Xavier Cousquer, coordinador temático de las áreas de Juticia y Seguridad, Expertise France.

ÍNDICE

Presentación	7
Justificación	9
Marco legal	10
Pautas y principios sobre los que se asienta el presente Protocolo	11
En cuanto a la definición del modelo.....	11
En cuanto a los principios en que se asienta.....	13
Ejes centrales de la intervención	14
Áreas de intervención.....	14
Aspectos metodológicos del modelo	15
Primera entrevista o entrevista de acogida	16
Reunión técnica, presentación distribución y diseño de estrategia del caso	17
 Protocolo de atención a víctimas del delito de trata de personas para los Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos de las corporaciones de asistencia judicial.....	19
I. Objeto del Protocolo	19
II. Principios generales de actuación	20
III. Definición del delito de trata de personas	20
IV. Ámbito	21
V. Detección y primeras actuaciones	21
VI. Realización de la entrevista	22
VII. Información a las víctimas.....	23
VIII. Ingreso definitivo del caso.....	25
IX. Elaboración y contenido del informe.....	25
X. Cierre integral del caso.....	26
XI. Relaciones interinstitucionales.....	26
XII. Coordinación.....	27
 Flujograma	29

Presentación

Este Protocolo de atención a víctimas del delito de trata de personas en los Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos de las Corporaciones de Asistencia Judicial es una iniciativa del Ministerio de Justicia de Chile y responde al compromiso del país de generar herramientas que permitan hacer frente a la problemática de trata de personas, tanto interna como transnacional, y que se enmarca en una serie de acciones articuladas entre todas las instancias públicas y privadas que conforman la Mesa Intersectorial sobre a Trata de Personas de Chile creada el 31 de julio de 2008.

Ha sido diseñado para los Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI), dependientes de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) de Chile, y está dirigido a prestar un adecuado servicio de orientación y asistencia legal a las víctimas del delito de trata de personas.

El Protocolo tiene como propósito fortalecer el trabajo realizado por los Centros en respuesta a este nuevo desafío, para lo cual actuarán en coordinación con el Ministerio de Justicia, a través del Departamento de Asistencia Jurídica, y por medio de las diversas instancias de articulación intersectorial en el ámbito técnico y político existentes en el país.

En la elaboración de este documento se ha tenido en cuenta, no solo el marco institucional y legal presente, sino la existencia del Modelo de Atención Integral Homogéneo para la Línea de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos.¹ Otro insumo de este texto son aportes que los profesionales que desempeñan su trabajo día a día han ido sumando a partir de las instancias de encuentro² celebradas en el marco de esta iniciativa.³

1. Modelo de Atención de los Centros de Atención a Víctimas de Delitos Violentos de las Corporaciones de Asistencia Judicial. Documento de Trabajo del Ministerio de Justicia de Chile, Santiago, octubre de 2010.

2. Talleres celebrados en junio y agosto de 2013, con la participación de funcionarios de las CAJ y los CAVI, en Santiago de Chile.

3. Línea de acción de Acceso al Derecho del Área de Justicia del programa EUROsocial II (2013), en el que el Ministerio de Justicia participa con el objetivo de especializar la asistencia jurídica a las víctimas del delito de trata de personas, recientemente incorporado en el Código Penal chileno, marco legal con base en el cual se ha elaborado este documento.

El presente Protocolo, tomando en cuenta el modelo previamente mencionado, contiene los principios rectores que determinan la manera de poner en funcionamiento la prestación de los servicios disponibles para otorgar asistencia jurídica, psicológica y social a las víctimas del delito de trata de personas.

El delito de trata de personas, tal como se configura en la legislación chilena, especialmente desde el punto de vista de quien es víctima, cumple todos los parámetros para ser considerado una de las mayores violaciones de los derechos humanos existentes, afectando significativamente la dignidad de las personas que lo padecen, sean ellas nacionales o extranjeras, para lo cual se debe propender por una atención interdisciplinaria integral y específica de manera articulada con las redes interinstitucionales definidas para hacer frente a este flagelo. En cuanto al ilícito de inmigración irregular, su tratamiento será abordado en la medida que vaya unido a la “explotación” en cualquiera de sus formas prevista en el tipo penal de la trata de personas.

Justificación

En el aspecto social, el principal problema de la víctima es su invisibilidad. La sociedad no percibe el delito de trata, porque desconoce las circunstancias características de su comisión o lo confunde con otro tipo de fenómenos asociados a la inmigración, las drogas o la prostitución.

Las víctimas de trata tienen el sentimiento de que no hay opciones viables para escapar de su situación y, por tanto, son renuentes a revelar información. Muchas de las víctimas no se identifican como personas sometidas a esclavitud debido al temor de sufrir represalias en su persona o en sus familias. El temor y el abuso a manos de sus tratantes genera desconfianza, desaliento y desesperación, dificultando su identificación como tales. La mayoría de las víctimas no pueden circular libremente, aunque parezca lo contrario. En muchas ocasiones, están sometidas a un “acompañamiento”, siendo imposible contactarse con su familia y amistades.

Las víctimas de trata se caracterizan por su temor a ponerse en contacto con las autoridades, siendo renuentes a confiarles el abuso al que están siendo sometidas, a cooperar con la persecución de los responsables, y a involucrarse en un proceso de recuperación personal dirigida institucionalmente. En muchas ocasiones la víctima es extraída de su entorno o comunidad de origen, encontrándose en una situación de irregularidad administrativa que acrecienta su reticencia a denunciar lo que padece. A su vez, en la experiencia comparada, se ha observado que una vez que es detectado el delito de trata por las autoridades, la opción de retorno se suele ver obstaculizada, tanto por motivos de seguridad de este, como por su mera ejecución material, debiéndose generar redes de apoyo que frecuentemente involucran a instituciones de la sociedad civil.

Desde el punto de vista penal, el principal problema al que se enfrenta una víctima de trata es a la provisión de protección por parte del Estado. Una vez soslayado este obstáculo, se plantea como desafío que la víctima colabore con las investigaciones y el proceso, lo que conlleva proporcionarle asistencia jurídica, técnicas para la comprensión del delito y su situación en él. En este aspecto, los CAVI están destinados a desarrollar un papel fundamental garantizando que no se produzca una segunda victimización, proporcionando a la víctima orientación e información de derechos para su

pleno ejercicio. En este sentido, la legislación chilena debe extender la protección, como en el caso de los menores de edad, más allá de lo que dura el procedimiento penal.¹

Por otra parte, el sistema de administración de justicia, sus operadores jurídicos y policiales no están lo suficientemente sensibilizados y capacitados para abordar el problema, lo que dificulta que puedan identificar rápida y fácilmente a una víctima de trata, existiendo a la fecha varias investigaciones, pero un bajo número de condenas.²

Marco legal

El marco legal internacional es muy amplio, conformado por profusa legislación internacional regional y nacional.³ El principal referente normativo es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y uno de sus Protocolos; el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que al haber sido ratificado por Chile en el año 2004 impone al país una serie de obligaciones, especialmente en el campo de la identificación y protección de la víctima. El Estado chileno, mediante la promulgación de la Ley 20.507 de fecha 8 de abril de 2011, que tipifica los delitos de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y establece algunas normas para su prevención y más efectiva persecución criminal, asume sus compromisos.

La legislación chilena diferencia acertadamente el tráfico de migrantes (art. 411 bis del Código Penal) de la trata de personas (art. 411 quáter del Código Penal) ajustándose con ello a sus compromisos internacionales, estableciendo un tercer tipo penal específico para la promoción o facilitación de la entrada o salida del país de personas para que ejerzan la prostitución (art. 411 ter del Código Penal).

La protección de quienes son víctimas y testigos se regula en el artículo 78 bis del Código Procesal Penal, al disponer bajo el título “Protección de la integridad física y psicológica de las personas objeto del tráfico ilícito de migrantes y víctimas de trata de personas”. Que establece lo siguiente: “El Ministerio Público adoptará las medidas necesarias o las solicitará, en su caso, tendentes a asegurar la protección de las víctimas de estos delitos durante el proceso penal, teniendo presente la especial condición de vulnerabilidad que las afecta”. Para los menores de 18 años, la norma previene que “los servicios públicos a cargo de la protección de la infancia y la adolescencia deberán

1. Artículo 78 bis del Código Procesal Penal.

2. En opinión de las representantes del Ministerio Público Karen Guzmán Valenzuela y Tania Gallardo Orellana, emitida en la capacitación del Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos de las CAJ, realizada los días 7 y 8 de agosto de 2013, en Santiago de Chile.

3. PIDCP, Pacto de San José, Pidesc, Reglas de Beijing, Protocolo de Cooperación Interinstitucional para fortalecer la investigación, atención y protección de delitos de trata de personas entre los Ministerios Públicos Iberoamericanos (AIAMP-REMPM); Mesa Intersectorial Contra la Trata (*Diario Oficial de la República* 19/8/2008); Reglas de Santiago, Cedaw, CDN, CTM, Convenio 169 OIT, Código Penal, Código Procesal Penal, Código Civil, Código Procesal Civil.

facilitar su acceso a las prestaciones especializadas que requieran, especialmente, aquellas tendientes a su recuperación integral y a la revinculación familiar, si fuere procedente de acuerdo al interés superior del menor”. Igualmente se establece —referido a los menores— que:

... en los casos en que las víctimas de los delitos establecidos en los artículos 411 bis y 411 quáter- se excluye el 411 ter- carezcan de representante legal o cuando, por ser independientes o contradictorios con los de aquel a quien corresponda representarlo, el juez designará un curador ad litem de cualquier institución que se dedique a la defensa, promoción o protección de los derechos de la infancia.

La legislación chilena, igualmente, y mediante la modificación del Decreto Ley 1094 de 1975 que establece normas para los extranjeros en Chile, ha introducido exclusivamente para el delito de trata, en su artículo 33 bis:

Que las víctimas del delito previsto en el artículo 411 quáter del Código Penal, que no sean nacionales o residentes permanentes en el país, tendrán derecho a presentar una solicitud de autorización de una residencia temporal por un periodo mínimo de seis meses, durante los cuales podrán decidir el ejercicio de acciones penales y civiles en sus respectivos procedimientos judiciales o iniciar los trámites para regularizar su situación legal de residencia. En ningún caso podrá decretarse la repatriación de la víctima que solicite autorización de residencia por existir grave peligro para su integridad física o psíquica resultante de las circunstancias en que se ha cometido el delito en sus países de origen.

En legislación comparada este espacio temporal se reconoce como un periodo de reflexión, para que la víctima cuente con un plazo prudencial para decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación del delito.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que internamente no se le ha dado esta denominación por parte de los operadores jurídicos y administrativos, y no existen antecedentes que permitan dar cuenta de una interpretación uniforme bajo la cual se esté haciendo uso de este plazo legal.

Pautas y principios sobre los que se asienta el presente Protocolo

En cuanto a la definición del modelo

Hay que resaltar que el Modelo de Atención Integral Homogéneo para la línea de atención integral a víctimas de delitos violentos en Chile, recoge como principios inspiradores del mismo el acceso a la justicia y trato justo, una participación activa de la víctima, el derecho a la reparación y la asistencia y atención integral. Entre sus objetivos destaca, el otorgamiento de una atención interdisciplinaria a víctimas de delitos vio-

lentos y a sus familias, previniendo y atenuando las consecuencias secundarias del delito y entregando a la comunidad herramientas que les permitan conocer y ejercer sus derechos, incorporando a la víctima a su red social primaria.

El presente Protocolo es un complemento al actual modelo de atención con el que cuentan los Centros de Víctimas de Delitos Violentos de las Corporaciones de Asistencia Judicial, considerando que las víctimas de trata de personas requieren un tratamiento diferenciado o específico por la naturaleza y las circunstancias del delito.

En consecuencia:

1. El Protocolo recoge un modelo de atención homogéneo, que permite ir adaptándolo según surjan las necesidades de las víctimas.
2. El protocolo delimita el ámbito del mismo. Esto es, precisa que va dirigido especialmente a las víctimas de trata en cuanto a su atención integral. A partir de un modelo previo que lo complementa, también se asegura la información y atención a otros grupos en estado de vulnerabilidad, como la población migrante. Dicha precisión resulta de gran importancia tomando en cuenta que la protección que dispensa la legislación chilena en uno y otro supuesto difiere.⁴
3. La intervención propuesta en el Protocolo tiene que adaptarse según se trate de víctimas de trata con fines de explotación laboral o con fines de explotación sexual, ya que en este segundo supuesto suele haber un componente de género.
4. El Modelo está pensado para ir coordinando la gestión desarrollada por las Corporaciones de Asistencia Judicial con el resto de las instituciones de manera intersectorial, apoyando con ello los esfuerzos puestos en marcha por parte de las diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil que participan en la lucha contra el fenómeno.
5. El Protocolo toma en consideración uno de los principales aspectos, que consiste en la “identificación” de la víctima. Ello resulta fundamental dado que todo el procedimiento de protección penal y parte del acceso a las prestaciones y sistemas de protección que puedan otorgarse, dependerá de una adecuada identificación.
6. La identificación puede producirse a consecuencia de una solicitud de asistencia efectuada ante los Centros de las Corporaciones de Asistencia Judicial, una denuncia presentada al órgano persecutor, las policías u otras instituciones. No obstante lo anterior, hay que establecer un sistema de detección con arreglo a unos parámetros de posibles víctimas vulnerables. En muchas ocasiones, la víctima ni siquiera es

4. Decreto Ley 1094 de 1975 que establece normas para los extranjeros en Chile, artículo 33 bis: “Que las víctimas del delito previsto en el artículo 411 quáter del Código Penal, que no sean nacionales o residentes permanentes en el país, tendrán derecho a presentar una solicitud de autorización de una residencia temporal por un periodo mínimo de seis meses, durante los cuales podrán decidir el ejercicio de acciones penales y civiles en sus respectivos procedimientos judiciales o iniciar los trámites para regularizar su situación legal de residencia. En ningún caso podrá decretarse la repatriación de la víctimas que soliciten autorización de residencia por existir grave peligro para su integridad física o psíquica resultante de las circunstancias en que se ha cometido el delito en sus países de origen”.

consciente de serlo, y su requerimiento puede no tener relación directa con el delito, razón por la cual la detección es fundamental.

En cuanto a los principios en que se asienta

En cumplimiento de las obligaciones internacionales, el Protocolo en esta materia tiene que asegurar:

1. La identidad y privacidad de las personas víctimas:⁵ todas las actuaciones deben ser confidenciales. A su vez la víctima tiene derecho a conocer sobre su derecho a realizar una denuncia y tomar cualquier decisión que dé lugar al inicio de un proceso penal.
2. La participación de las víctimas en las actuaciones:⁶ En cuanto al derecho a recibir información sobre su causa, este comprenderá: a) información sobre la sentencia o juicio o el estado del proceso; b) el hecho de que la persona privada de libertad o inculpada haya sido puesta en libertad o se haya fugado.
3. La seguridad física de la misma,⁷ incluso tras la finalización del procedimiento penal.⁸
4. La asistencia social y protección.⁹
5. Integración de los servicios.¹⁰
6. El acceso a la información y a la representación.¹¹

5. El párrafo 1 del artículo 6 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, complementa las disposiciones de la Convención Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y establece que deberán tomarse medidas para proteger la privacidad y la identidad de las víctimas de la trata, entre otras cosas, previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales en la medida que el ordenamiento jurídico interno lo permita.

6. El párrafo 3º del artículo 25 de la Convención recoge la obligación de los Estados parte de proporcionar a las víctimas la información y la oportunidad de presentar sus opiniones y preocupaciones en todas las etapas de las actuaciones.

7. En el artículo 24 de la Convención se hace referencia a los peligros que suponen “la represalia o intimidación” a quienes colaboran con las autoridades, mientras que en el apartado del párrafo 1 del artículo 9 del Protocolo, también se hace referencia a proteger a la víctima “contra un nuevo riesgo de victimización”. Algunas medidas de protección pueden ser, protección física, incluida la reubicación, imponiendo límites a la revelación de información sobre la identidad y paradero de la víctima, establecer normas probatorias que permitan a los testigos prestar su testimonio de modo que no se ponga en peligro su seguridad. Conforme a la Convención y al Protocolo contra la trata, la obligación básica de proteger a las víctimas es aplicable a todo Estado en que se encuentren, sea origen, tránsito, destino o repatriación.

8. En este aspecto, salvo en el caso de los menores de edad, actualmente en Chile se hace depender temporalmente, al limitarla a la fase en que dura el procedimiento penal, con lo que en principio habría que colegir que si no se inicia el mencionado procedimiento no se dispensa protección a la integridad física y psicológica de la víctima. Así, el artículo 78 bis del Código Procesal Penal establece que “Protección de la integridad física y psicológica de las personas objeto del tráfico ilícito de migrantes y víctimas de trata de personas. El Ministerio Público adoptará las medidas necesarias o las solicitará, en su caso, tendentes a asegurar la protección de las víctimas de estos delitos durante el proceso penal, teniendo presente la especial condición de vulnerabilidad que las afecta”.

9. El párrafo 3 del artículo 6 del Protocolo contiene una extensa lista de medidas de apoyo encaminadas a reducir el sufrimiento y los perjuicios causados a las víctimas y asistirles en su recuperación y rehabilitación.

10. En los programas de asistencia y apoyo es fundamental que los servicios sean completos e integrados. La asistencia médica, psicológica y jurídica, el alojamiento, la educación y la capacitación, no serán eficaces si se aplican aisladamente.

11. Los Estados deben facilitar la participación de las víctimas de trata en las actuaciones penales contra los traficantes, deben existir medios directos e indirectos de notificación y suministro de información. Los sistemas judiciales deben tener en cuenta los obstáculos a los que se enfrentan las víctimas cuando intentan acceder a ellos. En su condición de parte en los procedimientos, necesitan información en un idioma que les sea comprensible, como

Tomando como guía lo recogido en la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. Adicionalmente debe reconocerse el derecho a entender y ser entendido desde un primer momento. El derecho a la información desde el primer contacto con la autoridad competente debe abarcar lo siguiente: a) tipo de apoyo que podrán obtener y de quién obtenerlo, incluyendo el apoyo médico y psicológico que se les pueda brindar. c) Sobre los procedimientos de interposición de denuncias. d) El modo y condiciones en que podrá obtener protección, incluidas las medidas de protección. e) El modo y las condiciones en que podrá obtener asesoramiento y asistencia jurídica gratuita. f) El modo y condiciones para acceder a una indemnización. g) Si las víctimas residen en un Estado distinto las medidas o mecanismos especiales que estén disponibles para la defensa de sus intereses. h) Los procedimientos de reclamación en el caso de que la autoridad competente actuante no respete sus derechos. i) Los datos de contacto para la comunicación con sus familiares. j) Los servicios de justicia reparadora existentes. k) El modo y las condiciones para obtener el reembolso por los gastos en que haya incurrido como resultado de su participación en el proceso penal. l) Cuando se interponga una denuncia el derecho a realizarla en su lengua y obtener un resguardo de su denuncia y a recibir información sobre su causa en todo momento.

7. La asistencia integral a las víctimas del delito de trata,¹² proporcionada por los CAVI en coordinación con la red institucional.

Ejes centrales de la intervención

El Protocolo, como ya se ha indicado, complementa al modelo de atención ya creado. Para estos efectos, se permite realizar las siguientes precisiones respecto de sus áreas de intervención:

Áreas de intervención

En el modelo de atención existente se contemplan tres áreas: la representación judi-

punto de partida para lograr su implicación en el proceso. Se les debería igualmente proporcionar asesoramiento jurídico como parte del apoyo integrado que ofrecen los programas de asistencia a las víctimas. Muchas desconfían de las autoridades. La labor de los abogados, que deberían estar especializados, es informarles de sus derechos y de su papel en las actuaciones penales, acompañándolas durante todo el procedimiento.

12. El Protocolo contra la trata de personas establece que los Estados parte de origen y destino deben considerar la posibilidad de aplicar medidas dirigidas a la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de la trata. Los Gobiernos, en colaboración con organizaciones no gubernamentales, deberán proporcionar los siguientes tipos de apoyo: a) médico b) psicológico; c) lingüístico y de traducción; d) de rehabilitación, formación profesional y educación; e) albergue. La legislación chilena por ley la garantiza dicha asistencia integral cuando se trata de menores de 18 años, al establecer que los servicios públicos a cargo de la protección de la infancia y la adolescencia deberán facilitar su acceso a las prestaciones especializadas que requieran, especialmente, aquellas tendientes a su recuperación integral y a la revinculación familiar, si fuere procedente de acuerdo al interés superior del menor.

cial, la reparación integral y la intervención interdisciplinaria. En cuanto a la representación judicial, efectivamente la víctima es representada en juicio como parte querelante, si bien en el delito que nos ocupa, procede informar previamente a la misma de los especiales riesgos que asume, dada la estructura del delito. Es decir, la víctima desde el primer momento debe conocer las implicancias y ramificaciones de cualquier paso que decida dar, así como garantizar sus derechos y su privacidad. Tiene derecho a ser informada sobre su situación legal y cualquier gestión judicial que se haga en su nombre.

En cuanto a la reparación integral, esto es, todas aquellas acciones de apoyo dirigidas a que la víctima retome su vida habitual, hay que entregarle información y herramientas para acceder a las atenciones establecidas y fomentar su autodeterminación mediante la toma de decisiones personales para que la misma recupere el control sobre su vida. Un trabajo en conjunto, consecuencia de una intervención interdisciplinaria por un grupo de profesionales de distintas áreas que mantienen reuniones periódicas con las víctimas de trata, permitirá evitar una revictimización secundaria, en la medida que igualmente le puedan asistir en otros aspectos legales tales como la recuperación de documentos (pasaportes), casos de divorcio, demandas por restitución de hijos, posibles solicitudes de residencia, eventuales solicitudes de refugio o asilo, posibles programas de protección de testigos, etc.

Aspectos metodológicos del modelo

El modelo de atención a víctimas de delitos violentos de los Centros y Unidades de Víctimas de las CAJ es de carácter sistémico e interdisciplinario, y comprende acciones que van desde la prevención y promoción de derechos hasta la reparación e integración social de la víctima. Las líneas de acción consisten en: a) prevención de conflictos y promoción de derechos (entregando información en lenguaje simple y claro); b) orientación e información de derechos, ante el requerimiento de una persona que ha sido víctima del delito de Trata de personas; c) intervención integral e interdisciplinaria.

El Protocolo prevé la falta de develamiento de la situación de trata por parte de la víctima, ya que se estima que su ingreso espontáneo al servicio será marginal. Por ello, el modelo de atención operará en términos generales ante la derivación de una víctima en posible situación de trata de personas, para lo cual se basará en indicios como, por ejemplo, la percepción de que la persona está siendo retenida en contra de su voluntad, o en señales que revelen que está siendo controlada o abusada de algún modo.

En cuanto al delito de trata de personas, este debe incluirse dentro de los catálogos de delitos atendidos por el Modelo de los CAVI a nivel nacional.

En cuanto a la evaluación económica. En la actualidad, los CAVI atienden a personas que no cuentan con recursos para proveerse atención profesional jurídica, psicológica

y social por sí mismas. La excepción a este criterio es cuando afecta a un niño, niña o adolescente. El Protocolo extiende la atención a las víctimas de trata, sin necesidad de una previa calificación socioeconómica.

En cuanto a la viabilidad jurídica del caso, se deja su examen al criterio del conocimiento técnico y a la experiencia de los Centros. Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que por encima de cualquier otra consideración, la víctima es soberana para iniciar o no las acciones penales y civiles que correspondan, y que el modelo de protección en cuanto al ingreso de su caso en el sistema de atención psicosocial, tiene que ser al margen de su posición jurídica.

En cuanto a la descripción del flujo de atención, la recepción e ingresos de casos se produce en la actualidad por demanda espontánea,¹³ o bien por derivación institucional.

Primera entrevista o entrevista de acogida

Los objetivos generales y los específicos que ya se recogen en el modelo de atención son aplicables para las víctimas de este delito. No obstante ello, deben tomarse los resguardos ante la posibilidad de que un tercero que pueda tener una eventual relación con una posible víctima, se acerque al CAVI a solicitar información y orientación.

En la actualidad se prevé que la entrevista sea llevada a cabo por lo menos por una dupla compuesta por abogada/o, psicólogo/a o asistente social, y en los casos en que sea necesario, en presencia de los tres. En los casos de trata el Protocolo prevé que lo conveniente es contar siempre en un primer momento con el concurso de un asistente social.

A los efectos de la identificación, el primer paso es mantener una entrevista con la persona para conocer su situación, detectar la existencia de indicios de su condición de víctima de trata y asesorar a la misma sobre sus derechos y la posibilidad de denunciar, así como orientarla e informarle sobre el servicio especializado que le está dando asistencia.

Por otra parte, debe tenerse presente la existencia de elementos que pueden influir negativamente en la entrevista: diferencia de género entre entrevistador/a y víctima, situación administrativa, miedo a represalias, dominio del idioma, diferencias culturales, circunstancias que ha vivido, etc. Por ello, se deben adoptar medidas que generen un contexto confortable y seguro para la víctima.

En los casos en que se requiera, el Protocolo propone gestionar el apoyo de intérpre-

13. Vías de acceso de las personas al CAVI: el 45 % fue derivado directamente por el Ministerio Público, el 12,8% fue derivado de los centros jurídicos de las Corporaciones de Asistencia Judicial y el 12,1% accedió en forma espontánea. Fuente: Informe Gestión de las Corporaciones de Asistencia Judicial a Nivel Nacional (periodo enero 2011-mayo 2012).

tes, evitando que los mismos sean del círculo cercano a los tratantes u otras personas relacionadas con el lugar de explotación donde se realice la labor.

Igualmente, se establece que antes de iniciar la entrevista, se informará a la persona entrevistada sobre la confidencialidad del proceso y el tratamiento reservado que se dará a su caso.

El entrevistador se asegurará que comprende claramente el contenido y la finalidad de la entrevista y su derecho a no responder preguntas o a terminar la misma en cualquier momento.

De los criterios de atención para ingresar al Centro, la viabilidad jurídica de la acción, la jurisdicción y el domicilio son determinantes para ingresar el caso. Sin perjuicio de lo anterior, la orientación e información podrá ser otorgada a cualquier persona que la requiera; en cuanto a los plazos, si es extranjera —conforme a la legislación en materia de extranjería—, cuenta con un periodo para valorar si interpone la denuncia, en la medida que durante dicho periodo, no debe ser expulsada o repatriada.

Finalmente, ante la falta de asistencia al Centro, debe evaluarse en forma especial la deserción o el abandono del caso, atendiendo a las especiales condiciones de vulnerabilidad de la víctima.

Reunión técnica, presentación, distribución y diseño de estrategia del caso

Tras la realización de la entrevista, la dupla o tripleta profesional que la ejecutó, debe analizar el encuentro a fin de determinar un plan de intervención, sin perjuicio de la adopción de medidas de protección indispensables para la víctima, y el que sea derivada a un centro de asistencia de manera inmediata.

Estas medidas inmediatas pueden ser diligenciadas por el Centro, o gestionadas por su intermedio con el Ministerio Público o los Tribunales, y pueden consistir en el alejamiento de la víctima de la zona de riesgo, la incorporación en un programa de acogida alejado de la zona de riesgo, seguridad en sus desplazamientos, cambio de identidad, reubicación integral nacional o en el exterior.

En cuanto a la atención jurídica, no existen razones de peso que indiquen que en este aspecto debe variar en relación con la atención que se presta para el resto de los delitos que conoce el Centro.

No obstante lo anterior, con independencia de que la víctima quiera o no participar en el proceso, si existen otra u otras pruebas que permitan seguir delante de manera independiente a la voluntad de la misma, existe la obligación de remitirlas al Ministerio Público para que inicie las acciones legales oportunas, instando en su caso la regulari-

zación de la situación migratoria de la víctima. En cuanto a la atención social, se tiene que apoyar a la víctima en la gestión de una solución provisional en cuanto a su acogida, sin perjuicio de trabajar con la misma sobre las posibles redes de apoyo con que pueda contar, tanto locales como públicas.

En cuanto a la atención psicológica, el Modelo de diagnóstico, el desarrollo del proceso y el cierre, son plenamente aplicables. Sería deseable que los psicólogos contaran con una capacitación específica en esta materia, en cuanto al abordaje de la posible víctima.

En cuanto a las reuniones del equipo de trabajo, estas se llevarán a cabo con la periodicidad necesaria en atención a las necesidades de la víctima, de ser posible al menos cada quince días. En ellas se valorará la posibilidad de adoptar medidas complementarias para la atención de las necesidades básicas de la víctima mediante la coordinación con las instituciones de la red tendentes a lograr atención en salud, alimentación vivienda, vestuario, educación, recreación, entre otras.

El cierre integral del caso, conforme al modelo previsto, se producirá cuando se realice el cierre del último componente vigente o de alguna o algunas de las áreas de atención, normalmente cuando se haya reactivado socialmente a la víctima. Sin perjuicio de lo anterior, debe efectuarse una especial revisión de las causas de cierre administrativo existentes en la actualidad en caso de víctimas del delito de trata, dada las particularidades del fenómeno.¹⁴

14. No siempre será procedente finalizar el caso cuando la víctima abandona, cuando decide no continuar, cuando confiera un mandato a un abogado particular (muchas veces las mafias controlan a las mismas a través de su representación procesal) o cuando tenga una conducta impropia.

Protocolo de atención a víctimas del delito de trata de personas para los Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos de las corporaciones de asistencia judicial

(Complementario al Modelo de Atención Integral Homogéneo
para la Línea de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos)

I. Objeto del Protocolo

El presente protocolo tiene por objeto establecer pautas de actuación homogéneas en los Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos para la detección, asistencia, protección y ayuda a la identificación y defensa legal de las víctimas de trata de seres humanos, mediante la prestación de una atención interdisciplinaria e integral.

Este documento ofrece:

A las administraciones competentes, orientaciones para velar por la asistencia jurídica, seguridad y protección de la víctima y la de su familia sea esta nacional o extranjera.

En lo específico, el presente protocolo complementa el Modelo de Atención Integral Homogéneo para la línea de atención integral a víctimas de delitos violentos, en consecuencia le serán de aplicación a las víctimas del delito de trata de personas, sus principios inspiradores, sus objetivos, los servicios brindados y los ejes centrales de la intervención en la medida que no resulten incompatibles con lo que aquí se dispone.

Mediante el mismo se pretende:

- Prestar atención social, atención psicológica y representación judicial específica a las víctimas del delito y su grupo familiar y social sin necesidad de una previa calificación socioeconómica y con independencia de la posterior viabilidad jurídica del caso.

- Definir el procedimiento de las actuaciones que deben seguir los profesionales que desempeñan sus funciones en los mismos, ante la denuncia o derivación de una posible víctima de trata.
- Informar a las personas víctimas sobre sus derechos y los servicios y recursos disponibles en la red, entre otros, alojamiento seguro, atención sanitaria, atención psicológica, atención psiquiátrica, atención jurídica, otros recursos sociales, educativos y de formación, así como recursos para la reinserción sociolaboral, interpretación o para facilitar el retorno voluntario.
- Recoger todos los aspectos relativos a la denuncia para su puesta en conocimiento de la autoridad judicial mediante la elaboración de un informe que aporte elementos de juicio para adoptar las medidas de protección adecuadas. En el caso de extranjeros no residentes, para que la autoridad competente solicite un permiso de residencia temporal para la víctima o, en su caso, el retorno asistido de la misma.

II. Principios generales de actuación

La asistencia en los CAVI estará dirigida a priorizar la asistencia y protección de las víctimas, evitando la victimización secundaria y animando a las víctimas a colaborar en los procesos penales contra los tratantes. Para ello:

- Se informará a las víctimas de sus derechos o proveerá a terceras personas y a la comunidad en general información pertinente sobre los mismos.
- Se le brindará la asistencia judicial, psicológica y social establecida cuando así sea requerida.
- Se les permitirá el acceso a los recursos disponibles, no condicionándolo a la cooperación en la investigación del delito.
- Se protegerá la privacidad e identidad de las víctimas.
- Se procurará su recuperación y rehabilitación, durante todo el proceso que requiera en cada una de las áreas involucradas en su atención, según lo establece el modelo de los Centros de Víctimas de las Corporaciones de Asistencia Judicial.
- Instará ante las instancias competentes la regularización de la situación migratoria de las víctimas de trata cuando resulte procedente.

III. Definición del delito de trata de personas

Conforme a lo dispuesto en el artículo 411 quáter del Código Penal, por Víctima de Trata se entenderá aquella persona que, mediante violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener su consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la misma, la capte, traslade, acoja o reciba para que sea objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo la pornografía, trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a esta, o extracción de órganos.

Cuando se trate de un menor de edad, tendrá la consideración de víctima aun cuando no concurriera violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la misma.

En consecuencia y para los efectos del presente protocolo, por víctima se entenderá cualquier persona física, sea nacional o extranjera, de la que existan indicios razonables de que haya sido objeto de la conducta precedentemente descrita, con independencia de que la misma quiera o no denunciar los vejámenes a los cuales pudo haber sido sometida.

IV. Ámbito

El presente Protocolo se aplicará a todas las personas que pudieran resultar víctimas del delito de trata de personas, sin discriminación alguna por razón de edad, sexo, orientación sexual, nacionalidad y situación administrativa, raza, etnia, ideología u opinión política, religión o creencia, apariencia personal, enfermedad o discapacidad o cualquier otra condición.

Su ámbito de aplicación se extiende a todo el territorio del Estado, y será de aplicación en todos los Centros y Unidades de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos.

V. Detección y primeras actuaciones

La detección de posibles víctimas de trata de personas se produce por diversas vías: a consecuencia de una denuncia directa, o bien, cuando la misma es canalizada hacia los CAVI, por investigaciones llevadas a cabo por la policía, Inspección de Trabajo, a través de organizaciones públicas o privadas, o mediante el acceso a un servicio sanitario social, educativo o tras el contacto con un dispositivo de información pública (unidades móviles o servicios telefónicos).

Cuando por cualquiera de las vías anteriores ingrese o se tenga noticia en un CAVI de una presunta víctima de trata de personas se procederá, de manera inmediata, a adoptar las medidas oportunas para su protección y posterior identificación, mediante el ingreso provisional del caso al Centro.

En caso de derivación institucional, se enviará directamente a la persona presuntamente tratada al CAVI correspondiente, sin perjuicio de los contactos mediante medios electrónicos o telefónicos previos, y siempre que su estado de salud lo permita.

Será competente para asistir provisionalmente a la víctima el Centro de Atención más cercano al lugar de residencia o domicilio de la misma, o, en su defecto, del lugar en donde haya sido encontrada o haya prestado denuncia.

La primera actuación sobre la víctima, si así lo precisa su estado de salud, será su derivación a un centro médico para su evaluación.

Desde el momento en que se considere que existen indicios razonables para creer que la persona es víctima de trata de personas, durante todo el proceso de detección o identificación deberán adoptarse las medidas necesarias para la protección de sus derechos, procurando aislarla de personas pertenecientes o cercanas al entorno de los presuntos tratantes.

La asistencia social y el apoyo jurídico necesario será prestado a la víctima si lo precisa, con independencia de que en un momento posterior, y tras ser evaluada pueda renunciar a la misma.

Del hecho y las circunstancias que rodean a la persona, sin perjuicio del posterior informe al que se refiere el número VIII del presente Protocolo, se dará inmediata cuenta a las policías o brigadas especializadas competentes para su investigación y al Ministerio Público.

Se arbitrarán las medidas necesarias, mediante las comunicaciones institucionales adecuadas, para evitar el contacto con los presuntos tratantes y con personas directa o indirectamente vinculadas con ellos.

VI. Realización de la entrevista

Si la persona se encuentra en condiciones de hacerla, se procederá a mantener una primera entrevista con los profesionales de los CAVI que, para tal efecto, recibirán una formación específica en la identificación de víctimas de trata. La mencionada entrevista deberá llevarse a efecto lo más pronto posible.

Para la identificación de la supuesta víctima se evaluarán todo tipo de elementos más allá de la información relacionada, con la averiguación del hecho delictivo y sus autores. Se valorará el género, el riesgo y los fines de la explotación a la que la misma ha sido sometida, así como la existencia de otras personas sometidas al mismo abuso.

La primera entrevista o entrevista de acogida, así como todas aquellas entrevistas que sean necesarias, se desarrollarán de forma reservada y confidencial, en idioma comprensible para la víctima, con sensibilidad, comprensión, paciencia y con asistencia de intérprete cuando fuera necesario. Se tendrá en cuenta el sexo, la edad y las demás circunstancias de la misma.

La entrevista será llevada a cabo por la dupla o triplete profesional compuesta por abogada/o, psicóloga/o, o asistente social. Se procurará desde un primer momento contar con un asistente social. Se realizará de manera prioritaria y se informará a la institución derivadora de la fecha de la primera atención.

Se gestionará la existencia de intérprete oficial o, en su defecto, alejado del entorno de la víctima cuando la misma lo precise.

Para determinar la existencia de que una presunta víctima de trata se valorarán los indicadores establecidos en la Guía de Actuación, recabándose toda la información disponible sobre la situación de la persona. La valoración de los indicios se hará con arreglo a un criterio de máxima protección, con la finalidad de garantizar su atención integral y seguridad, y profundizar en la investigación, especialmente en caso de víctimas extranjeras que se encuentren en el país en situación de irregularidad administrativa.

Durante la entrevista, se informará a la supuesta víctima de los derechos y de la atención jurídica, social y psicológica que se ponen a su disposición. Para tal efecto se redactará un “acta de información de derechos”.

Si la víctima fuere menor de edad, se adoptarán las medidas necesarias tendentes a evitar su victimización secundaria. Si el menor no tuviere representante legal se solicitará a la autoridad judicial competente el nombramiento inmediato de un curador *ad litem*.

La valoración final que se realice en un Centro de Atención, deberá incluir la referencia a los riesgos a los que eventualmente se enfrentará la víctima, a partir de la situación que describa y los antecedentes que dispongan los profesionales. En este sentido, debe intentar salvaguardar el servicio y seguridad, gestionando de esta forma y a partir de sus circunstancias personales, la adopción de medidas de protección.

VII. Información a las víctimas

A la presunta víctima se le informará en lenguaje claro y sencillo:

- Sobre el derecho que tiene a su identidad y privacidad.
- Sobre las medidas de protección y seguridad disponibles y la forma en que proceden. En el caso de que se trate de una persona ciudadana extranjera sin residencia permanente en el país, y si finalmente se le reconoce la condición de víctima del delito de trata de personas, deberá presentar una solicitud de autorización de una residencia temporal por un periodo mínimo de seis meses, durante los cuales podrá decidir el ejercicio de acciones penales y civiles en sus respectivos procedimientos judiciales o iniciar los trámites para regularizar su situación legal de residencia.
- Sobre la posibilidad de ser atendida por el Centro de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos de la Corporación de Asistencia Judicial, informándole los componentes del servicio y su funcionamiento.
- Sobre la posibilidad de ser derivada y, si así es requerido, el otorgamiento de los recursos dispuestos por las autoridades pertinentes o bien a partir de recursos propiciados por parte de la sociedad civil, para garantizarle en su caso, un alojamiento

- conveniente y seguro, ayuda material, asistencia médica y servicios de interpretación, en caso de ser necesarios.
- Sobre la posibilidad de que esta asistencia se haga extensiva a sus vínculos familiares.
 - Cuando se interponga una denuncia, el derecho a realizarla en su lengua y obtener un resguardo de su denuncia y a recibir información sobre su causa en todo momento.
 - Sobre el derecho que tiene la víctima a presentar una querrela a través de un abogado que defenderá y representará sus intereses en la Fiscalía y en los Tribunales, y sobre la asunción por parte de los CAVI, si es su deseo, de su defensa y representación.
 - Sobre los posibles riesgos que su actuación en el proceso penal puede conllevar. Se le informará que con independencia de que quiera o no ser parte del proceso penal, que el presunto hecho delictivo será puesto en conocimiento del Ministerio Público y que dicha institución podrá iniciar de oficio las investigaciones contra los presuntos tratantes.
 - Sobre la posibilidad —así la víctima decida no continuar con la querrela—, de que el abogado que le asista por parte del CAVI, con un poder de la misma, pueda tener acceso a los antecedentes del caso, con el objeto de brindarle una adecuada asesoría jurídica que le pueda llevar con posterioridad a reconsiderar su decisión.
 - De hacerse parte en el proceso penal, sobre el derecho a recibir por parte del CAVI información sobre el estado del proceso, la hora y lugar del juicio, sobre el contenido de la sentencia y si la persona inculpada ha sido puesta o no en libertad o se ha fugado.
 - Sobre los procedimientos de reclamación cuando a su juicio la autoridad competente actuante no respete sus derechos.
 - Sobre los datos de contacto para la comunicación con su familiares y con los servicios de asistencia. A tal efecto, la víctima podrá designar el CAVI que le corresponda para que en el mismo se reciban todas las notificaciones y citaciones derivadas del procedimiento.
 - Sobre el modo y condiciones (si los hubiere) para obtener el reembolso a consecuencia de su participación en el proceso penal.
 - Sobre el modo y condiciones para acceder a una indemnización derivada del hecho delictivo.

En caso de que la presunta víctima rechace expresamente todas o algunas de las medidas de protección y seguridad propuestas, deberá hacerse constar mediante diligencia en el “acta de información” realizada al efecto, que será firmada por el personal actuante de los CAVI y por la víctima, dejando constancia en caso de que esta última no pudiera obtenerse. Los recursos asistenciales de protección inmediatos que precise, se le brindarán aunque la misma no quiera mostrarse parte en el procedimiento ni denunciar a los tratantes.

A la misma se le otorgará un plazo prudencial para que adopte la decisión adecuada.

Si se trata de un ciudadano extranjero sin permiso de residencia, el plazo para tomar la decisión procedente no será inferior a seis meses.

VIII. Ingreso definitivo del caso

Tras la revisión de los antecedentes, realizada la entrevista, una vez se tengan sospechas de que se está en presencia de una víctima de trata de personas, se procederá a ingresar el caso al centro de atención para iniciar su proceso de reparación y representación judicial considerando la decisión o postura de la presunta víctima.

En las reuniones técnicas del equipo se abordarán las necesidades de atención de la víctima, con la finalidad de hacer un seguimiento personalizado de la misma y diseñar una estrategia de intervención, de ser posible con una periodicidad quincenal. En ellas se valorará la posibilidad de adoptar medidas complementarias para la atención de las necesidades de la víctima y su familia.

Si tras la evaluación del caso se llegara al convencimiento de no estar en presencia de una víctima de delito de trata de personas, igualmente se pondrá en conocimiento del Ministerio Público para los efectos pertinentes, informándose al interesado de la decisión. En tal supuesto se le ofrecerán a la misma las medidas de atención interdisciplinaria integral si resulta ser víctima de alguno de los delitos competencia de los CAVI, o se le derivará a la instancia de atención que corresponda.

IX. Elaboración y contenido del informe

Para el evento que el Ministerio Público solicite información del caso al CAVI, el Centro preparará un documento con base en las siguientes consideraciones:

El responsable de cada CAVI, una vez se cuente con los elementos de juicio indispensables y con la ayuda de los especialistas que han atendido a la víctima, elaborará un informe que contenga los indicios de la existencia de un delito de trata de personas, así como el “acta de información de derechos” realizada para su remisión al Ministerio Público.

En dicho informe se hará constar expresamente todos aquellos datos que permitan identificar a los tratantes o presuntos tratantes, y que se consideren relevantes para el desarrollo de la investigación, proponiéndose aquellas medidas de protección para la víctima que se consideren convenientes.

Igualmente, se propondrá al Ministerio Público, cuando ello proceda, y en el supuesto de que se trate de una víctima extranjera de trata en situación de irregularidad, que proceda a reconocerle formalmente la condición de víctima, si la misma lo solicita, y a iniciar los trámites para que se le otorgue una autorización de residencia temporal por

un periodo mínimo de seis meses, y para que no se proceda a su repatriación por existir grave peligro para su integridad física o psíquica.

A la propuesta deberá anexarse:

- Copia de toda la documentación que incorpore la información que se haya obtenido.
- Información sobre las manifestaciones que la víctima hubiera realizado en respuesta a la información de derechos.
- Información sobre la situación administrativa de la misma en Chile y en su caso, si le interesa su retorno voluntario al país o ciudad de origen.
- Información sobre las circunstancias personales de la misma.
- Cualquier otra información que se considere relevante, incluyendo un informe pronóstico final sobre la existencia o no de grave peligro para la integridad física o psíquica de la víctima en el caso de que la misma sea repatriada a su país de origen.

X. Cierre integral del caso

El cierre integral conforme al modelo previsto, se producirá cuando se realice el cierre del último componente vigente o de alguna de las áreas de atención, normalmente cuando se haya reactivado socialmente a la víctima. Sin perjuicio de lo anterior, debe efectuarse una especial revisión de las causas de cierre administrativo existentes en la actualidad en caso de víctimas del delito de trata, dada las particularidades del fenómeno.

XI. Relaciones interinstitucionales

Sin perjuicio de lo que pueda disponerse una vez se apruebe el mecanismo de articulación elaborado por la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas, los responsables de los CAVI mantendrán informados al sistema de administración de justicia, las policías y las instituciones privadas que presten asistencia a la víctimas, de las incidencias que tengan conocimiento, en las cuales su participación pudiese ser oportuna.

De la misma manera, los equipos de los Centros de Víctimas se coordinarán con las instituciones de la red que pudieran tener información del caso o mantengan relación con la víctima, orientada a obtener antecedentes provenientes de los informes de las CAJ relacionados con todas las resoluciones por las que se acuerden medidas cautelares o el levantamiento de las mismas contra el o los presuntos tratantes, sobre las medidas de protección acordadas o el levantamiento de las mismas, sobre el señalamiento de juicios y audiencias y en general sobre todas aquellas vicisitudes procesales que tengan trascendencia para la víctimas o víctimas del delito.

En cada CAVI se llevará un registro y análisis estadístico del tipo y frecuencia de los

servicios prestados, desagregados por las características de las personas usuarias con la finalidad de establecer perfiles de atención e información especializada a las instancias que puedan requerirlas para el diseño y monitoreo o modificación de políticas públicas.

XII. Coordinación

En cada una de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial y con una periodicidad mínima semestral, deberá mantenerse una reunión de trabajo con los coordinadores institucionales de los Centros de Víctimas de Delitos Violentos con la finalidad de realizar un seguimiento con la aplicación del presente Protocolo y sobre la eficacia de las medidas adoptadas para la atención, protección y seguridad de las víctimas.

La convocatoria y organización de la reunión estará encomendada al responsable del Departamento de Asistencia Jurídica dependiente de la División Judicial del Ministerio de Justicia.

En función de las cuestiones por tratar se podrá convocar a las organizaciones y entidades de la sociedad civil con experiencia acreditada en la materia, especialmente a aquellas que tengan mayor implantación.

Lo anterior sin perjuicio de la función y competencias que en esta materia le corresponde al Ministerio de Justicia en la Mesa Intersectorial contra la Trata de Personas.

Flujograma

El presente flujograma ilustra el Protocolo de atención a víctimas de trata explicado atrás y complementa el marco de atención ya existente, esto es el “Modelo de Atención Integral Homogéneo para la línea de Atención a víctimas de delitos violentos en Chile” que contempla tres grandes áreas: (i) Representación judicial, (ii) Representación integral, (iii) Intervención disciplinaria.

PRIMER PASO: DETECCIÓN Y PRIMERAS ACTUACIONES

¿Cómo se detecta?

- Cuando por cualquier medio los CAVI entran en contacto con la potencial víctima: porque la persona acude directamente o a través de tercera persona.
- Cuando se deriva de otra institución (por denuncia Ministerio Fiscal/Órgano inmigración/ONG/etc.).

Se implementan acciones para el ejercicio de los derechos de la víctima, lo que supone el:

SEGUNDO PASO: PROTECCIÓN

- Derivación médica o atención psicológica inmediata si el estado de salud lo requiere.
- Aislamiento del entorno en el que se produce la explotación y de las personas tratantes.

TERCER PASO: IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN DE DERECHOS

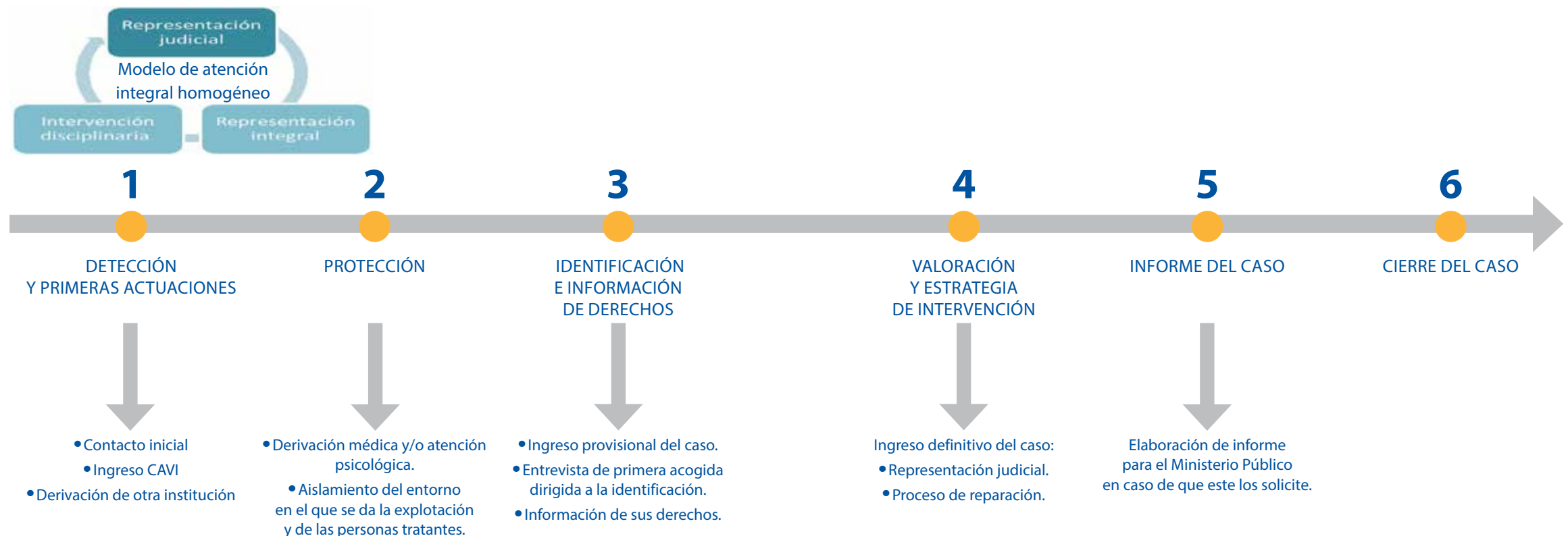
- Ingreso provisional del caso
- Entrevista de primera acogida dirigida a la identificación de:
 - Víctima de trata con fines de explotación sexual.
 - Víctima de trata con fines de explotación laboral.
 - Víctima de otras formas de explotación, abuso o vulneración de derechos vinculada a trata.

- Información a la presunta víctima sobre sus derechos
 - Atención jurídica, social y psicológica que se le puede ofrecer.

CUARTO PASO: VALORACIÓN Y ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

- Ingreso definitivo del caso: cuando la identificación resulta positiva.
- Si resulta negativa, la asistencia que se le brinda es la del Modelo de atención integral ya establecido.
- Reunión técnica dirigida a la presentación, distribución y estrategia del caso (dirigida a realizar un plan de intervención) sin perjuicio de la adopción de medidas de protección indispensables para la víctima.

- Proceso de reparación
 - Atención social y psicológica diligenciada por el centro correspondiente.
- Representación judicial
 - Atención jurídica para: Asistencia legal gratuita a la persona víctima para el proceso penal y otros procesos convergentes.



Reparación civil o acciones derivadas de su situación de persona migrante irregular.

Gestiones ante los Tribunales/Ministerio Público.

Ello conlleva, opcionalmente:

QUINTO PASO: INFORME AL MINISTERIO FISCAL

(Solamente cuando el Ministerio Fiscal lo solicita) dirigido a facilitar su regularización administrativa.

SEXTO PASO: CIERRE DEL CASO

Se produce conforme al Modelo de Atención Integral cuando se consigue la reactivación social de la víctima.

Consortio Liderado por



Socios Coordinadores



Participan más de 80 Socios Operativos y Entidades Colaboradoras de Europa y América Latina

EUROsociAL es un programa de cooperación regional de la Unión Europea con América Latina para la promoción de la cohesión social, mediante el apoyo a políticas públicas nacionales, y el fortalecimiento de las instituciones que las llevan a cabo. EUROsociAL pretende promover un diálogo euro-latinoamericano de políticas públicas en torno a la cohesión social. Su objetivo es contribuir a procesos de reforma e implementación en diez áreas clave de políticas, en ciertas temáticas, seleccionadas por su potencial impacto sobre la cohesión social. El instrumento del que se dota es el de la cooperación institucional o aprendizaje entre pares: el intercambio de experiencias y la asesoría técnica entre instituciones públicas de Europa y de América Latina.



www.eurosoci-al-ii.eu